

UMBERTO JARA

ANATOMÍA DE UNA TRAGEDIA



**2016-2022. APUNTES, RETRATOS Y OPINIONES
SOBRE UN PAÍS QUE NOS ESMERAMOS EN DESTRUIR**

UMBERTO JARA

ANATOMÍA DE UNA TRAGEDIA

2016-2022. APUNTES, RETRATOS
Y OPINIONES SOBRE UN PAÍS QUE
NOS ESMERAMOS EN DESTRUIR

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 216 y siguientes del Código Penal).

La editorial no asume ninguna responsabilidad por el contenido del presente trabajo periodístico e investigación respectiva, siendo el autor el único responsable por la veracidad de las afirmaciones y/o comentarios vertidos en esta obra.

ANATOMÍA DE UNA TRAGEDIA

2016-2022. APUNTES, RETRATOS Y OPINIONES
SOBRE UN PAÍS QUE NOS ESMERAMOS EN DESTRUIR

© 2022, Umberto Jara

DISEÑO DE CUBIERTA E INTERIORES:

Departamento de Diseño de Editorial Planeta Perú

CORRECCIÓN DE ESTILO:

Jorge Giraldo Sánchez

Derechos reservados

© 2022, Editorial Planeta Perú S. A.

Av. Juan de Aliaga N.º 425, of. 704 - Magdalena del Mar. Lima - Perú

www.planetadelibros.com.pe

Primera edición: julio 2022

Tiraje: 3000 ejemplares

ISBN: 978-612-319-770-4

Depósito Legal N.º 2022-06131

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora N.º 156, Breña

Lima - Perú, julio 2022

*Mi país es una fiesta de ebrios, un fragor de batalla, una guerra civil,
mi país es mi temor, tu ira, la voracidad de aquel,
la miseria del otro, la defección de muchos, la saciedad de unos cuantos,
las cadenas y la libertad, el horror y la esperanza, el infortunio y la victoria.*

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY

ÍNDICE

Una historia de este tiempo	9
Una nube en Palacio	25
Maki, la embajadora	29
El abogado de PPK	32
Kuczynski, la vanidad personal y el desprecio por el país	35
La señora K	41
La carta de la Sra. K	44
Alan García Pérez	47
Toledo (finalmente) en presidio	50
Disuelto el Congreso, pero la crisis continúa	53
El misterio del papel higiénico	59
Ausencia de decisiones	62
El virus económico	65
El presidente del sector financiero	68
La barbarie de la mentira en pandemia	71
¿De qué clase son los peruanos?	75
Lo que no se dice	78
¿Hoy es miércoles?	82
Los médicos de Iquitos	85
Insólito ministro para un extraño país	89
Un médico vale por muchos hombres	92
El <i>swing</i> de doña Mirian	94
El «error» de un bribón	97
La mentira es una ofensa	101
De algo nos tenemos que morir	103
Los audios presidenciales	106

Retrato de los responsables de una crisis	109
Un país a oscuras	113
¿Cómo entender a Vizcarra?	116
El despropósito de una nueva cuarentena	123
Sagasti y la miseria moral	127
La igualdad según Sagasti	131
El derecho a sospechar	134
Las manos en un ánfora	138
Pedro Castillo, una historia que se repite	143
El patético señor De Soto	146
Una mirada a Pedro Castillo	148
Esta guerra civil de los nacidos	152
Abimael Guzmán, el oscuro sendero final	155
El yunque Bellido	159
La coca de Barranzuela	161
La grotesca doble moral	164
Historia de una fotografía	168
Llegó la realidad	171
Soportamos un miserable espectáculo	175
Pedro Castillo, el hijo de los mercantilistas	179
Los guionistas de <i>El juego del calamar</i>	183
Los fiscales mediáticos	189
El muerto que no aparece en la lista oficial	193
La antigua costumbre de la Sra. Delta	196
La señora O	199
El activismo de América	202
Y el periodismo, ¡ay, siguió muriendo!	205
Hildebrandt, el claudicante y Lúcar, el coherente	208
Epílogo	213

UNA HISTORIA DE ESTE TIEMPO

El Perú era un país que, con tropiezos, injusticias, desorden y castas, de alguna manera se las había arreglado para alcanzar, entre 1992 y 2016, un cierto equilibrio que significó —aunque existan los necios negacionistas— una economía sin inflación, con reservas fiscales, crecimiento de la clase media y descenso de la pobreza. En medio, es cierto, existió corrupción, políticos impresentables, pésimos servicios públicos, deplorable Poder Judicial, periodismo destruido por activistas y todas las taras que nos acompañan, pero en el día a día, comparado con la región, el Perú tenía un buen lugar. Digamos: para un país subdesarrollado, haber logrado alguna estabilidad era ya una bendición después de tantos años convulsos.

Ese pequeño, mínimo esbozo de país se empezó a destruir a partir del año 2016 cuando fue electo como presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard. Aunque llegó a Palacio de Gobierno por una mínima diferencia de votos, logró legitimidad gracias a una sola certeza que, al final, resultó una falsa apariencia: su reputación de diestro en temas económicos hizo suponer una posible buena gestión gubernamental. También contribuyó a legitimarlo su edad. Sus 77 años sugerían que debía interesarle dejar un final decente a su carrera política y a su biografía personal. Pero el hombre no había mudado su vieja costumbre de usar los cargos estatales para los negociados y la corrupción, tal como lo había hecho años atrás con la corruptora empresa brasileña Odebrecht,

oficializando su ingreso al Perú con una obra costosísima e innecesaria como la Carretera Transoceánica.

En verdad, para PPK, el Perú jamás fue su país. El Perú era, para él, un lugar del cual podía extraer riqueza. La misma lógica del Virreinato. El oro de las Indias para la Corona. Practicaba también la conducta usual en la clase alta nacional: el desprecio a la población ejemplificado en sus zambullidas a media mañana en la piscina del Lima Golf Club, mientras el norte del país naufragaba abatido por las inundaciones causadas por la corriente de El Niño. Similar conducta movía a su entorno. No es casual que perdieran la administración del país en apenas veinte meses.

El breve gobierno de PPK fue el último capítulo de lo que podríamos llamar el débil orden «occidental» que tuvo el Perú. Su frivolidad, su desdén y, sobre todo, su irresponsabilidad lo llevaron a despreciar las tareas de gobierno y nunca entendió —ni quiso descifrar— la dimensión de dos enemigos al acecho.

El primero, el Congreso manejado por su rival electoral Keiko Fujimori, que había reclutado una gavilla de bárbaros encargados de fundar los cimientos de lo que sería el Congreso de los años siguientes: una guarida de bribonzuelos ocupados en desmontar la débil institucionalidad del país.

El otro enemigo, sonriente en las fotos, aguardaba agazapado bajo el cargo de primer vicepresidente, función desde la cual habría de complotar para hacerse de la Presidencia de la República. Ese sujeto llamado Martín Alberto Vizcarra Cornejo apareció en el escenario nacional gracias a la frivolidad con que PPK y su entorno armaron la plancha presidencial para las elecciones de 2016. «Había demasiados blancos y necesitábamos un provinciano», ha confesado el exministro Carlos Bruce. El cholo provinciano estaba destinado al relleno de la segunda vicepresidencia, pero la batalla egocéntrica de dos mujeres con mando lo situó en la primera

vicepresidencia. Era un desconocido para todos, pero lo ubicaron en el clave cargo de sucesor del primer mandatario.

Irresponsable hasta el extremo, Kuczynski, aludiendo a su avanzada edad, llegó a decir: «Estoy viejo, es verdad, pero si me pasa algo tengo dos pólizas de seguro: “Martincito” y “Mechita”», en alusión a sus dos vicepresidentes, pero ni siquiera entendió que solo una era la póliza, la de Vizcarra por ser primer vicepresidente. Y esa póliza nunca estuvo vigente.

Jamás revisaron sus antecedentes como corrupto gobernador regional. Alguien les dijo que en la minúscula región de Moquegua había un tal Vizcarra que había hecho una gran gestión en el rubro Educación. Cuando le ofrecieron integrar la plancha presidencial aceptó, pero pidió que un hombre de su confianza vaya al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A nadie le llamó la atención su desdén por el sector Educación, a pesar de que venía precedido de una (falsa) fama de gran gestor en el rubro. Poco después, el propio Vizcarra asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones —el de más alto presupuesto en el Estado peruano— y, nuevamente, nadie preguntó sobre el porqué de su afición a ese sector a pesar de que la masiva corrupción de Odebrecht era muy bien conocida por PPK y sus hombres de confianza. Le dieron el cargo sin más.

Con Vizcarra llegó alguien que se mantendría en las tinieblas durante unos años, la lobista de la corrupción regional, Karelim López. En este rubro, Vizcarra también habría de modificar el estilo. Digamos que se pasó de la lobista socialité Cecilia Blume Cillóniz a Karelim López Arredondo y, más tarde, al expresidentario Zamir Villaverde García. El mismo oficio con formas, salones, estilos y *looks* diferentes, pero el mismo paisaje con el Código Penal de fondo.

En suma, las puertas a la horda de bárbaros las abrieron, de par en par, Pedro Pablo Kuczynski y los miembros de su entorno

más cercano. Y esa es la cuenta que mancha para siempre sus trayectorias. Allí empezó la tragedia peruana de estos últimos años. Utilizo la palabra tragedia en su justa acepción: Situación o suceso luctuoso y lamentable que afecta a sociedades humanas.

A partir de Vizcarra la política peruana cambió brutalmente de actores. Se hizo más rústica, más desvergonzada, más impune. Lo usual en el Perú era que los Gobiernos mezclaran profesionales capaces con otros mediocres, pero siempre, incluso en la corrupción, trataban de mantener algunas formas, determinadas reglas, procedimientos básicos.

El moqueguano Vizcarra tenía otra escuela. La de su clan regional. Amigos que, como él, habían sido gobernadores envueltos en corrupción, depredadores de la institucionalidad, caciques convencidos de que su voluntad es la norma y la legalidad, las instituciones son sendos estorbos que hay que aplastar. Son, básicamente, hombres sin valores, usuarios de la mentira como costumbre y están afincados en la informalidad. Dos de los más notorios cómplices de Vizcarra fueron, precisamente, dos ex gobernadores regionales corruptos: César Villanueva, su operador en la intriga para lograr la Presidencia de la República, y Vladimir Cerrón, con quien maquinaría el control ilegal del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

En su gestión, Vizcarra implantó un nuevo estilo: el rechazo a profesionales capaces y la convocatoria a sólidos ineptos dispuestos a actuar en banda. Ungió como ministro de Transportes y Comunicaciones a Edmer Trujillo, sindicado como su cajero; hizo primer ministro a Vicente Zaballos, cuya notoriedad provenía de ser un presunto pagador de coimas en partidos de fútbol en la Copa Perú; nombró ministro de Educación a Martín Benavides Abanto, su socio en el negocio de los licenciamientos de universidades; eligió en plena pandemia a Víctor Zamora Mesía, el mortal inepto

responsable de agravar la crisis de la COVID-19 que concluyó con doscientos mil muertos; y designó a una absoluta inexperta llamada María Antonieta Alva Luperdi como ministra de Economía, bajo el simple mérito de ser hija de un amigo suyo. Sin mayor talento asumió el manejo de las finanzas de un país paralizado por el encierro de la cuarentena y se convirtió en entusiasta firmante de bonos populistas y cuasi vocera de corporaciones beneficiadas en la pandemia. Para certificar esos desmanes, le fabricaron el paraguas de una ficticia popularidad a través de un operativo de prensa. Cerró su actuación con la entrega de dinero estatal a una empresa de su padre y se marchó al bienestar de Suiza.

Esta lista de oprobio incluye a Mirian Morales, la mujer con quien Vizcarra gobernó desde la intimidad, y al esperpéntico Richard Swing Cisneros, cuya sórdida presencia palaciega sería de muy mal gusto relatar.

Estos personajes deplorables tienen acceso al escenario por la maltrecha democracia peruana sin partidos políticos. Cabe anotar que la desaparición de las entidades partidarias fue obra intencional y perversa de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en los años noventa, cuando decidieron destruir la institucionalidad política. Admitamos también que la tarea se les facilitó porque los políticos tradicionales habían cometido tantas tropelías que su propio desprestigio contribuyó a generar su ocaso.

Con el correr de los años y por la inacción ciudadana, se fue produciendo la inexorable desaparición de la política como una carrera, y así el país dejó de tener políticos de nivel y con trayectoria. La mala imagen de la política, la judicialización constante de quienes la ejercían alejó a los profesionales serios y competentes. No es para nada extraño que los últimos exponentes de la política con criterios de organización partidaria hayan sido tres en debacle irremediable y perseguidos por la justicia.

Alejandro Toledo Manrique —presidente de la República en el período 2001-2006— fugó del país una vez que sus grotescas mentiras no pudieron contener las evidencias de sus latrocinios. Se presentó como alternativa democrática contra la corrupción y logró la presidencia gracias a que una corte, llena de personas con intereses propios, lo sostuvo a sabiendas de que era un oportunista con antecedentes turbios, había tenido una antigua cercanía con Vladimiro Montesinos, no reconocía la paternidad de una hija y padecía el vicio del alcohol. Lo único que importó fue colocarlo en el poder para servirse del poder, tarea realizada en especial por aquellos que, en ese período, empezaron a capturar el Estado peruano y fueron etiquetados como los «caviars».

Las manchas del período de Toledo forman un listado extenso: la fábrica de falsificación de firmas para inscribir su movimiento político, los sobornos de la empresa colombiana Bavaria y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, las cuentas de Eliane Karp en paraísos fiscales, la utilización de los medios de comunicación para campañas de desinformación y cacería de brujas, y las licitaciones para sus familiares, entre tantas otras fechorías. Hubo espacio, incluso, para el folclore de mal gusto con el avión parrandero y los amoríos con una policía de su escolta oficial. Afincado en California con su socia y esposa Eliane Karp, Toledo terminó en prisión dictada por un juez norteamericano. Obtuvo arresto domiciliario y a los 76 años de edad está a la espera de una extradición.

El destino de Alan García Pérez fue más bien infausto y diríase acorde con el personaje, mezcla de opulencia y desdicha. Radicado en Madrid bajo el lema «Yo no me corro», realizaba visitas puntuales al país por la investigación fiscal que lo acusaba, con evidencias, de negocios corruptos con la firma Odebrecht. En su último viaje para acudir a una citación, el fiscal José Domingo Pérez le tendió una emboscada procesal y logró la aprobación de su impedimento de

salida del país. García buscó asilo diplomático y logró ingresar a la residencia del embajador de Uruguay. Sin embargo, a pesar de que las gestiones para su asilo iban por buen rumbo, terminaron naufragando por la campaña de sus opositores y enemigos que cercaron al Gobierno uruguayo. Al abandonar la embajada tenía como acompañante un revólver y una mano vendada por un disparo casual.

El 17 de abril de 2019, la cacería fiscal logró una orden judicial para detenerlo en su residencia de Miraflores. Fue un operativo cargado de sombras pendientes de investigación. Existen versiones que señalan que habría existido una presunta interceptación telefónica a García, que permitió a los fiscales del Grupo Especial Lava Jato conocer detalles que los llevaron a la extraña decisión de que no asista a la diligencia su tenaz perseguidor, el fiscal José Domingo Pérez; más extraño si se tiene en cuenta la adicción de este funcionario a los flashes y al protagonismo.

Lo cierto es que, si los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez conocían que el dos veces presidente estaba armado, el operativo que se montó debió ser distinto y con previas precauciones en resguardo no solo de los funcionarios que enviaron, sino del propio expresidente a quien querían capturar. Aquella diligencia terminó con el suicidio de Alan García Pérez.

Un dato sugerente para quienes consideran que los fiscales del caso Lava Jato utilizarían su cargo para acompañar una agenda política, es que aquel año 2019 resultó muerto el político más experimentado del país, y se encontraba en prisión, también por gestiones de los citados fiscales, Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, cuyo arraigo en los votantes, más allá de los cuestionamientos, la convertían en protagonista central de los procesos electorales.

En cuanto a Keiko Fujimori, cabe decir que su caso es el retrato de alguien que dilapida un capital político. El fujimorismo

como exponente del populismo de derecha logró, en la década de los noventa, afincarse en amplios sectores populares de Lima y el interior del país. Las obras públicas, los colegios y los servicios públicos le ganaron la adhesión de amplios sectores de la población a Alberto Fujimori. Frente a ello, se generó el odio sin pausa de la izquierda y los caviares hacia Fujimori porque su figura resume al personaje que los alejó del botín estatal por una larga década. En esa línea, siguieron combatiendo con recursos lícitos e ilícitos a todo integrante del fujimorismo por el temor de que un retorno al poder los pudiese volver a dejar sin el acceso al dinero estatal.

A su caída en el año 2000, a pesar de la descomunal corrupción descubierta y los siniestros manejos desde el poder con su socio Vladimiro Montesinos, la opción electoral del fujimorismo siguió vigente. Entonces, Keiko Fujimori se lanzó a la arena política con el único argumento de ser portadora del apellido. Su trayectoria se resumió en ser una candidata mediocre, con una imagen pública de alguien ajena al trabajo, con acusaciones por corrupción y un indebido estilo para conducir su organización política con criterios de mafia, es decir, decisiones en el encierro con una cúpula.

Su estigma mayor se lo impuso ella misma a partir de 2016, cuando tras lograr la mayoría congresal prefirió sepultar la estupefaciente oportunidad que tuvo para darle al país todas las reformas que se necesitaban para una modernización del Estado y, en lugar de ello, optó por convertir su fuerza parlamentaria en una oposición irracional, ponzoñosa a tal punto que terminó generando la peor debacle política del siglo, cuyas consecuencias funestas se agravaron a partir del 2018.

El escenario político nacional quedó en manos de personajes deplorables dispuestos a hacer política no en función del país, sino en servicio de sus adeptos.

En capítulos sucesivos de esta tragedia peruana, habrían de arribar al poder central Francisco Rafael Sagasti Hochhausler y José Pedro Castillo Terrones, el primero sin elección popular y el otro vía unos comicios discutidos y plagados de irregularidades.

La ruleta política le permitió a Sagasti sacar provecho de revuel-tas callejeras financiadas a lo largo de una semana para derrocar a Manuel Merino de Lama, designado por el Congreso como su-cesor del vacado Vizcarra. Hasta ese momento, Sagasti aspiraba a ser candidato en futuros comicios electorales, pero el tumulto parlamentario lo habilitó para convertirse en el encargado de la Presidencia de la República. Un retrato de la endeble firmeza de principios de Sagasti ocurrió aquella noche del 15 de noviembre de 2020: aceptó raudamente el cargo a pesar de que, un par de horas antes, él y su Partido Morado habían exigido que se anule la vacancia de Martín Vizcarra. Era su socio político.

El pacto informal consistía en que el Partido Morado suceda en el poder a Vizcarra, pero el objetivo se vino abajo por la incompetencia de Sagasti, su trasnochado estilo propio del siglo pasado y sus amaños con Vizcarra, sobre el cual nunca esbozó una crítica, menos una denuncia e, incluso, aceptó hacerse cómplice en el ocultamiento de la lista VIP de vacunados clandestinamente mientras cientos de miles de peruanos agonizaban o morían en los hospitales y en sus casas. El resultado electoral del año 2021 fue un veredicto: el Partido Morado obtuvo una ínfima votación.

Cuando Francisco Sagasti asumió el encargo de ejercer la Presidencia de la República por ocho meses, hubo quienes pensaron que trazaría una línea para recuperar los valores mínimos tan ausentes en la política peruana. Fue una vana ilusión para aquellos que, al igual que con Kuczynski, se dejan llevar por las apariencias. Hombre formado en el cómodo trabajo de las oenegés y los organismos internacionales, usuario de la deformada vanidad de

quien cree ser más de lo que en realidad es, el interés central de Sagasti fue tratar de conservar el poder que le llegó de casualidad en el ocaso —77 años— de su vida pública. Nunca leyó la ironía perfilada por el acerado periodista Víctor Hurtado: «A veces me pregunto por aquellos personajes. Parece que unos viven para regresar y otros mueren por quedarse (cuestión de vida o muerte). Nada han aprendido. ¿Elegirlos otra vez? ¿A mérito de qué?».

Ese fue el error descomunal de Sagasti, que oscurece su ya pálida biografía y que pulverizó a su incipiente Partido Morado y al sector que lo aplaude desde la bandera que tiene el apelativo irremediable de «caviares». Tratar de conservar el poder a como dé lugar es la manera más segura de perderlo.

En efecto, el yerro fatal fue el apoyo a Pedro Castillo Terrones, el candidato que encabezó la plancha presidencial del partido Perú Libre que, en realidad, era la fachada política de la organización criminal «Los dinámicos del centro» capitaneada por el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción.

A pesar de esta y muchas otras evidencias de delitos, Sagasti, desde el poder, extendió su apoyo a Castillo en la cuestionable campaña electoral, y cuando asomó la pugna con Keiko Fujimori por la asunción del mando, hizo de voluntario mediador solicitando a Mario Vargas Llosa que interceda para que el candidato vinculado a los herederos de Sendero Luminoso pueda asumir la presidencia. Ya fuera del poder, Sagasti continuó con reuniones de soporte —unas oficiales y otras furtivas— a un individuo como Castillo que, desde el primer día en que asumió la presidencia, mostró su decisión de vandalizar el Estado peruano.

En cuanto a Pedro Castillo Terrones, cabe anotar que es un seguidor desmedido, se diría brutal, de la ruta de barbarie trazada por Martín Vizcarra. Es el encargado, junto a una caterva de vándalos, de destruir lo que este país había logrado avanzar. Lo triste o, más

bien, lo trágico, es que población con acceso a mínima educación y un gran sector de la clase media urbana limeña, presuntamente instruida, le otorgaron el voto a un individuo que gritoneaba en plazas un discurso arcaico hecho de clichés y era incapaz de hilar dos frases seguidas frente a un micrófono en una entrevista.

La postura política de Pedro Castillo y su socio inicial, Vladimir Cerrón, es tan prehistórica que ya en el año 1980, hace más de cuatro décadas, un famoso sociólogo norteamericano, Alvin Toffler, la había descrito con esta sentencia: «Alimentan sueños de revolución extraídos de las amarillentas páginas de panfletos políticos del pasado». A esos seres de la prehistoria, todavía se les presta atención en el Perú, se les concede el sufragio y, peor aún, se les otorga el máximo poder.

En este páramo en que se ha convertido el Perú, los oportunistas, corruptos y depredadores del erario nacional campeon porque tienen la colaboración de los medios de comunicación. Por supuesto, en la prensa brincan, se alteran y braman cuando se los cuestiona, pero, en la intimidad, sus protagonistas —propietarios y periodistas— saben de sus yerros, de sus omisiones, de sus pactos. ¿Por qué lo saben? Porque existe una ley de vida imposible de derogar: cada quien a solas y ante un espejo sabe lo que hace y lo que deja de hacer.

El periodismo tiene un rol esencial. Su obligación no solo es informar con veracidad. Se suele olvidar que tiene armas y facultades para la tarea fundamental de proteger a una sociedad frente a los desmanes de los políticos, los empresarios, los jueces, los fiscales y todo aquel que cruza los márgenes de la ley. Para eso existe la investigación periodística: para poner en evidencia a los que mal usan el poder, a los que corrompen y son corrompidos, a los que buscan evadir la ley en beneficio propio. Cuando el periodismo cumple con su función, la ciudadanía recibe la alerta y allí empieza

la tarea de la sociedad: exigir, protestar y generar los procesos necesarios para la restauración del orden.

Pero si los propios medios de comunicación se autocensuran, se tornan permisivos, complacientes y se inclinan ante el poder, entonces trasladan, de manera perniciosa, las decisiones informativas —en realidad, el silencio de la verdad— a los políticos, a los grupos económicos y a sectores sociales específicos que buscan ventajas e impunidad. Cuando esto ocurre estamos ante una especie de dictadura disfrazada, aunque se inflamen proclamándose artífices de la libertad de expresión.

Eso ocurre en el Perú. La diversidad informativa fue guillotizada cuando el Grupo El Comercio se hizo del ochenta por ciento del mercado informativo llevándose de encuentro la Constitución de la República, que prohíbe las posiciones de dominio. En una democracia es letal que exista un oligopolio informativo porque significa destruir un valor esencial: la pluralidad de posiciones. El público necesita seguir a periodistas de diversas posturas y los medios necesitan de la competencia, como los peces del agua, para tener una saludable vigencia. Solamente ciudadanos ampliamente informados pueden construir una opinión propia; lo contrario es generar televidentes, escuchas o lectores sin criterio y sectarios.

Se sabe que los periodistas pueden ser prisioneros de los poderosos, pero se olvida que también pueden ser cautivos de los propios dueños de los medios de comunicación que impiden el ejercicio real del oficio periodístico y eso tiene una grave consecuencia: cuando no existen periodistas con libertad en su tarea, los ciudadanos están indefensos y, si eso ocurre, aunque se diga lo contrario, no hay democracia verdadera.

Como si no bastara con todo lo anotado, ocurrió algo mucho más penoso a nivel de toda la prensa, con escasas excepciones. Se sustituyó a los profesionales del periodismo por activistas con

disfraz de periodistas. Así, la información pasó a estar sometida a la agenda política de cierto sector y se incurrió en la tremenda baja de convertir a los medios de comunicación en tribunales de facto que dictan sentencias anticipadas, que deciden quiénes son «buenos» y quiénes «malos», que linchan a quienes osan opinar distinto, que tienen la potestad de ejercer vetos y determinar muertes civiles. Es imposible considerar a esos actores como periodistas y a esas empresas como medios de comunicación.

Cómo no va a ser una tragedia lo que acontece en el Perú. Si alguien piensa que es exagerado el uso de la palabra tragedia, quizá deba entender que un país es el hogar colectivo en el que nos toca vivir por razón de nacionalidad. Cuando ese hogar en que se vive y en el que viven los hijos y los nietos y reposan los ancestros, queda en manos de ineptos, prontuariados diversos, charlatanes de arrabal y ávidos asaltantes de las arcas fiscales, todo eso se convierte en una tragedia porque se compromete el escaso bienestar de millones de familias, se agrava la pobreza de los que menos tienen y se perturba el futuro que, en este país, cuesta cada día construirlo.

Este libro contiene artículos que abarcan el período 2016-2022. Estaban dispersos. Una vez reunidos intentan retratar lo acontecido en nuestra historia reciente. No es ningún estudio, menos un ensayo. Son sencillos retratos parciales de momentos específicos escritos al ardor de la coyuntura. Tal vez sean útiles para evitar que la escasa memoria nacional suprima episodios que no deben ser olvidados.

En lo personal, solo puedo anotar que son textos de un periodista y escritor que tiene en su corazón furias y penas por este tiempo aciago, por esta tragedia peruana.

UMBERTO JARA
Lima, 9 de julio de 2022